

Documentos



CIDESD

03

Marzo / 2015

Colombia 2015: Paz, recesión y territorialidades

Libardo Sarmiento Anzola, Investigador Asociado y miembro del Consejo Asesor de CIDESD

Colombia, con sus 48,2 millones de habitantes, es una sociedad que puja por emerger de la barbarie a la civilización. El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país, es el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada. Todo indica que en 2015 se firmará el fin del conflicto armado entre el Gobierno y las FARC; sin embargo, la construcción de la paz encuentra el obstáculo de una economía con síntomas recesivos, un modelo de desarrollo depredador y un contexto de elecciones de 1.102 alcaldes y 32 gobernadores en un entorno político peligrosamente polarizado por las fuerzas de extrema derecha.

Fin del conflicto armado y la paz

La necesidad de modernizar el agro colombiano y garantizar un mayor bienestar a la sociedad rural, desde una perspectiva liberal, es una coincidencia histórica sobre la cual hay pleno acuerdo entre el gobierno, el sector empresarial progresista y las fuerzas insurgentes. Este es el pegante material que fundamenta y viabiliza los otros puntos de negociación de la Habana: participación política, víctimas, narcotráfico, justicia, dejación de las armas, entre otros.

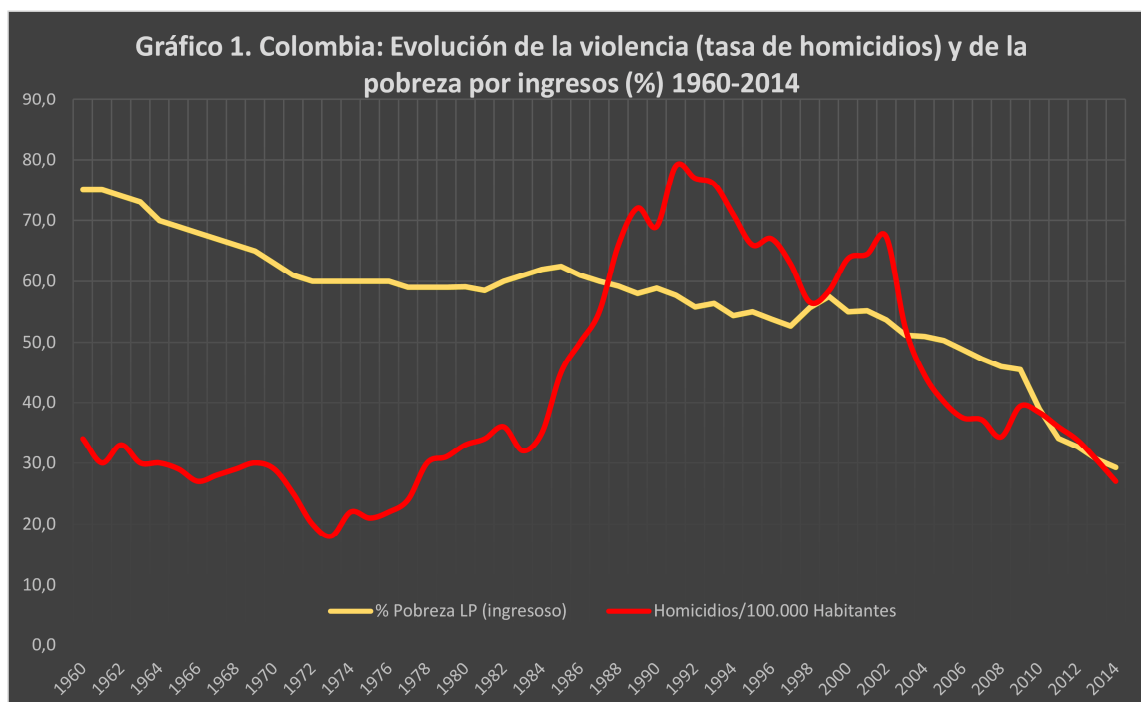
Todo está dado para la firma del fin del conflicto armado en este año 2015; el mandato ciudadano en las elecciones presidenciales fue claro en torno a la paz. Pero difícilmente se llevará a cabo antes de las elecciones de los gobiernos locales, se

requiere del aval de los nuevos mandatarios en torno a las negociaciones de la Habana y sus implicaciones territoriales.

Las expresiones de la premodernidad política y económica son un obstáculo real para el buen fin de este proceso. Latifundistas y organizaciones de extrema derecha intentan mantener sometida a la sociedad colombiana en defensa de su estructura de poder económico y territorial, su ideología fascista y la conservación del botín de guerra acumulado durante el último medio siglo.

El ELN difícilmente llegará a un acuerdo similar de fin del conflicto armado con el gobierno. Dos consideraciones lo limitan: i) la concepción de democracia directa, más amplia y profunda que la contenida en la formalidad legal del país, que conduce a que esta fuerza insurgente establezca como necesario la participación real de la sociedad desde lo local y regional en la negociación de la paz; requerimiento que no es de fácil aceptación por el gobierno; ii) la crítica respecto al modelo extractivista y el control de los recursos minero-energéticos por parte del capital transnacional, aspecto que tampoco el gobierno está dispuesto a negociar.

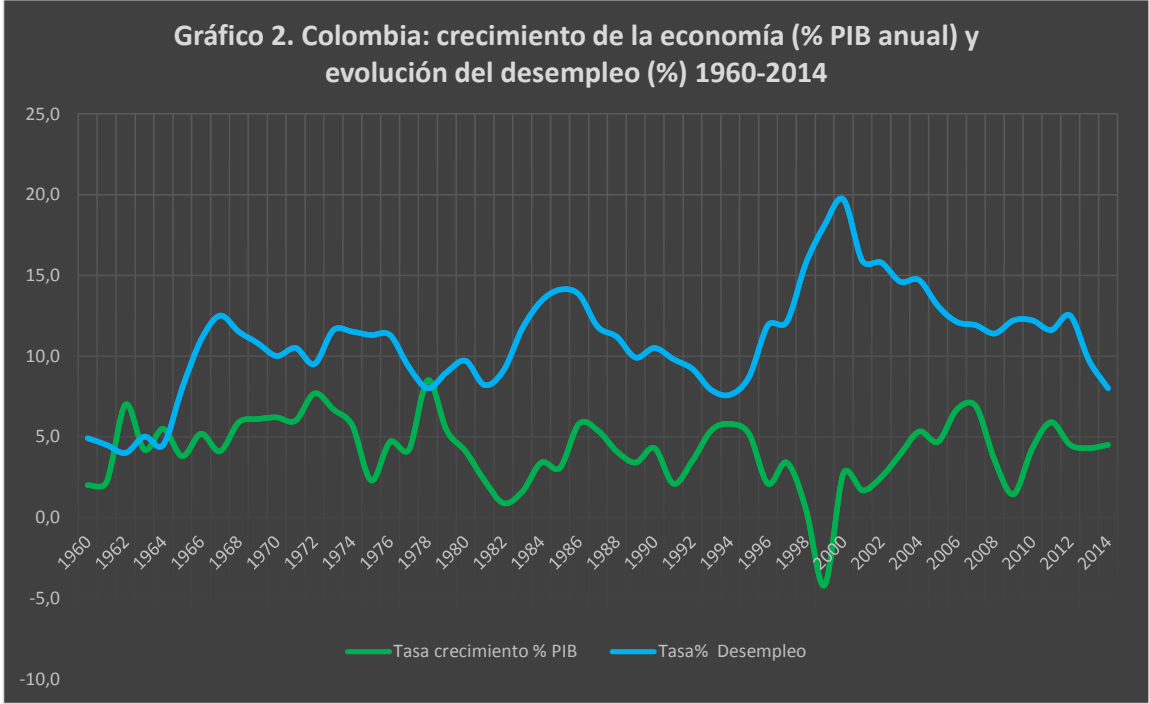
Pese a todo, el sangriento ciclo de violencia que ha padecido la sociedad colombiana, con particular intensidad entre finales del siglo XX e inicios del actual, ha comenzado a descender de manera consistente y sin pausa (ver gráfico 1). Sin embargo, los 13.000 homicidios ocurridos en 2014 siguen colocando al país entre los más violentos del mundo, junto con Venezuela y las naciones centroamericanas. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes es actualmente de 27 en Colombia; en el mundo, según Naciones Unidas, es de 6,2. La paz de la mano de la democracia integral y de la garantía universal de los Derechos Humanos es el único camino posible para salir de la crónica barbarie colombiana.



Síntomas recesivos, desempleo y pobreza

El país ha registrado un continuo crecimiento económico, reducción del desempleo y caída en los niveles de pobreza (gráficos 1 y 2), todo lo cual contribuye a contar con las condiciones materiales para construir la paz, elevar el bienestar de los ciudadanos y fortalecer y ampliar la clase media. No obstante, en 2015 tres situaciones ensombrecen el panorama: i) la crisis del sector minero energético, el cual es fuente clave de los ingresos del gobierno, producto de la caída de 50% en los precios del petróleo que dejó sin piso real el financiamiento del Plan de Desarrollo y las proyecciones económicas del gobierno; ii) el menor crecimiento de la economía, la elevación del desempleo, la baja en los ingresos de los hogares y el freno a la caída en las tasas de pobreza ocasionado por el síntoma recesivo que se sentirá con fuerza en 2015; iii) la malsana concentración del ingreso y la riqueza es un problema estructural que impide el desarrollo sostenido del país y las condiciones necesarias de inclusión social ciudadana.

El financiamiento en los acuerdos de paz obligará a recortar presupuesto en otros sectores claves para el desarrollo, como Ciencia y Tecnología, y a impulsar nuevas reformas tributarias que limitan la inversión, empobrecen las familias y elevan el desempleo.



Territorialidades, elecciones y extractivismo

El balance de las elecciones de autoridades locales es satisfactorio en cuanto participación ciudadana. En octubre de 2011 se registró la mayor votación en la historia del país con un total de 17,4 millones de votantes equivalente a 56,8% de participación del censo electoral. En comparación con el año 2007 la abstención se redujo en 1.8%, al pasar de 45.1%, el nivel registrado en 2007, a 43.2% en la jornada electoral de 2011.

En esta ocasión, para el año 2015, se espera que esta positiva tendencia se mantenga. Lo preocupante es que la polarización política que se observó en las elecciones presidenciales de 2014 se exacerbará en los comicios de 2015. Los poderes gamonales y latifundistas, la toma de administraciones locales por el paramilitarismo y las fuerzas de extrema derecha, además de las tradicionales mafias locales que se apropian de los recursos públicos y las lealtades regionales premodernas, son elementos que socaban e impiden el afianzamiento de la democracia moderna en Colombia.

Las desigualdades sociales y económicas también son regionales. El modelo extractivista que violenta el ambiente y la sostenibilidad de las comunidades en sus territorios se deja sentir con más fuerza en una regiones frente a otras. El gobierno nacional atropella los planes locales de desarrollo y la democracia local, como es el caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo construido por la transnacional española Emgesa, localizado al sur del departamento del Huila, viene destruyendo la economía local y desarraigando por la fuerza a las comunidades tradicionales de esta región del país.

Frente a la agresiva concentración de la tierra en Colombia, el modelo de acumulación extractivo y el cambio climático, los grupos de productores más vulnerables (campesinos, indígenas, negros) tiene comprometida su seguridad alimentaria, el bienestar y la supervivencia . La oferta de los suelos para agricultura intensiva afectados por procesos de desertificación aumentan en el área del ecosistema seco en 1.4% anual. Las áreas de los cultivos de banano, caña de azúcar, palma de aceite sobre suelos susceptibles a la degradación por desertificación aumentan en 3%. Cada año desaparece 3,2% del área en bosques y el 11,5% del total de especies se encuentran amenazadas. En el año 2013, según información del Ideam, se deforestaron 120.933 hectáreas de bosques; y aunque tal tasa es menor que la reportada en la última década aún es muy alta e intensa, además de estar concentrada en la Amazonia (otras regiones muy afectadas son la Andina –con el 22 por ciento del total–, la Caribe, así como la Orinoquia y la región Pacífica, la única que aumentó su deforestación con respecto al periodo anterior). El desmonte es producto de las actividades mineras, la extracción maderera, la expansión de la frontera agrícola y el desaforado proceso de urbanización especulativo.

Un objetivo mayor, que involucra la sostenibilidad y la viabilidad del conjunto de la sociedad colombiana en el inmediato futuro, tiene que ver con la concertación de una

política ambiciosa de ordenamiento ambiental de las actividades económicas, organización político-administrativa y de los asentamientos poblacionales en el territorio. Si bien es poco probable que las actividades insostenibles salgan de la economía colombiana (latifundio ganadero, minero-energéticas, monocultivos agroempresariales), la viabilidad del agro se fundamenta en la economía ambiental (servicios ambientales), la seguridad alimentaria y los productos de agroexportación con sello verde. Es un modelo de desarrollo sostenible que tiene como agentes básicos nuestros pueblos raizales (indígenas, negros, campesinos, colonos y comuneros). Aunque necesario no es suficiente el desarrollo sostenible, Colombia requiere de un modelo integral de desarrollo que incorpore también la garantía de los derechos humanos y la democracia radical, es la vía que permite transitar de la barbarie a la esquiua civilización del país.